



TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

AUTO DE SUSTANCIACIÓN No

Santiago de Cali, diecisiete (17) de noviembre de dos mil veinte (2020)

MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD ELECTORAL. ÚNICA INSTANCIA
DEMANDANTE:	GUSTAVO ADOLFO PRADO CARDONA pradoabogado23@hotmail.com
DEMANDADO:	MARTÍN ALFONSO MEJÍA LONDOÑO armandoescoobar23@hotmail.com ofijuridica@calimaeldarien-valle.gov.co REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL notificacionjudicialval@registraduria.gov.co CONSEJO NACIONAL ELECTORAL cnenotificaciones@cne.gov.co AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO procesosnacionales@defensajuridica.gov.co
MINISTERIO PUBLICO:	sepatino@procuraduria.gov.co procjudadm20@procuraduria.gov.co
PROCESO:	76001-23-33-000-2020-00012-00

I. ANTECEDENTES

La parte demandada presenta memorial vía e mail el 11 de noviembre de 2020 (AD 015), donde solicita se declare desistida la prueba solicitada al municipio de Calima Darién por la parte demandante.

Señala que, en audiencia inicial celebrada el jueves 29 de octubre de 2020 se dispuso que “...la parte actora elaborará los oficios y los remitirá junto con esta acta electrónicamente a las entidades dentro de los dos días siguientes a esta audiencia, so pena de entenderse desistida la prueba...”

Así las cosas, el martes 3 de noviembre de 2020, vencería el término de dos días con que contaba el demandante para correr la solicitud a los entes Estatales de las pruebas decretadas, y solo hasta el miércoles 4 de noviembre de 2020 aquella elevó la solicitud de información, motivo por el cual, de conformidad con lo señalado en audiencia inicial, deberá entenderse desistida la prueba.

Para el efecto adjunta constancia de recibido por parte de la alcaldía de Calima Darién el 4 de noviembre de 2020, de la solicitud probatoria presentada por el demandante (AD 013).

II. CONSIDERACIONES

El desistimiento es entendido en términos generales como una sanción procesal que se configura ante el incumplimiento de las cargas procesales asignadas a las partes.

En el presente caso, se advierte respecto de la prueba decretada a la parte demandante de oficiar al municipio de Calima Darién para que remita la

relación de las cédulas inventariadas y dejadas bajo custodia, antes de las elecciones locales llevadas a cabo el 27 de octubre de 2019, que efectivamente fue solicitada el 4 de noviembre de 2020 y no dentro de los dos días siguientes a la fecha de celebración de la audiencia inicial, no obstante, no podría por parte del despacho aplicarse la presunción de desistimiento, pues ésta opera cuando la parte interesada omite íntegramente su obligación para evitar que pese a su inacción, posteriormente insista en la práctica de las mismas dilatando injustificadamente el proceso con fundamento en su propia negligencia.

En el presente asunto, se advierte que la parte actora si bien no solicitó la prueba dentro de los dos (2) días siguientes, lo hizo al cuarto (4) día, restando tiempo suficiente para que la entidad custodia de la prueba documental en este caso, la remita, pues la audiencia está programada para el 23 del presente mes y año, lo que deja a salvo un lapso de más de doce (12) días hábiles para el aporte de los documentos, cuando en la audiencia se conminó a hacerlo en el término de ocho (8) días.

Es importante resaltar que para todos los intervinientes en el proceso, la justicia material debe ser el faro que guíe sus actuaciones y las pruebas ya decretadas corresponden al proceso en sí mismo, no a la parte que la solicita, por ello deben surtirse de conformidad con los principios de lealtad procesal, buena fe, veracidad y probidad, *“...principios éticos que han sido incorporados en los sistemas jurídicos y que componen el llamado “principio de moralidad” del derecho procesal, que constituye uno de los triunfos de la concepción publicista de esta rama del Derecho sobre las teorías meramente privatistas o utilitaristas. Lo que se pretende hacer al incorporar estos preceptos morales al Derecho positivo es darle carácter vinculante a la forma de actuar de las partes, por considerar que ésta es jurídicamente relevante dentro del proceso judicial debido a que media el interés público en las actuaciones procesales.”*¹

En esta secuencia, y ante el hecho de que el demandante en efecto solicitó la información decretada al municipio de Calima Darién el 4 de noviembre de 2020, con tiempo suficiente para que la entidad aporte la documentación que se encuentra en su poder, invocar tal formalismo no impide que cada sujeto procesal esté conminado a cumplir su carga y por ello el Municipio a partir de la fecha de la solicitud se encuentra obligado a su remisión.

Como si lo anterior fuera poco, recuérdese que nos encontramos en el escenario de una acción pública que por su naturaleza involucra el interés general y por ello la administración de justicia, como servicio a cargo del Estado, impone una serie de responsabilidades a los intervinientes, encaminadas a que el servicio garantice el ejercicio efectivo de los derechos de las personas, y a que el Estado pueda asegurar que todos los individuos tengan acceso al mismo, en este caso se ventila la puridad de un proceso electoral cuyo control de legalidad debe interesar en mayor medida a las autoridades que representan y desarrollan el modelo democrático que nos rige.

En esta secuencia, y habiendo cumplido la parte demandante su obligación de solicitar la prueba ante el municipio de Calima Darién, se negará la

¹ T-1014 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa

solicitud que hace la parte demandada de entenderse desistida la prueba y en consecuencia, corren los términos para que el municipio de Calima Darién, entidad que tiene la prueba, la remita al proceso.

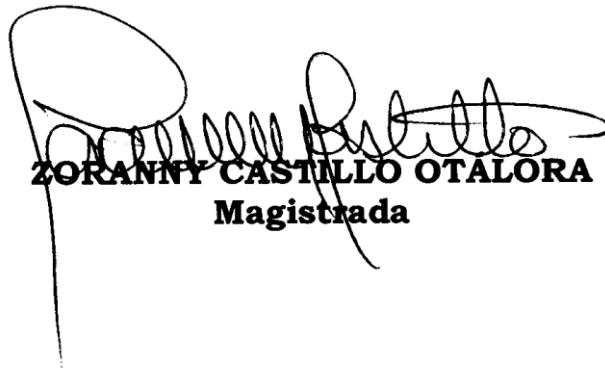
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la solicitud que hace la parte demandada de entenderse desistida la prueba respecto del municipio de Calima Darién; en consecuencia, corren los términos para que el municipio de Calima Darién, entidad que tiene la prueba, la remita al proceso.

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 2 del Decreto 806, el canal oficial de comunicación e información para recibir memoriales es el correo electrónico: rppmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ZORANNY CASTILLO OTALORA
Magistrada